

La norma legal que se propone, de aplicación general y no sólo referida al caso específico de la amnistía de 1978, sería la siguiente:

"Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 107 del Código de Procedimiento Penal:

"Si la causal de extinción de la responsabilidad penal fuere la señalada en el N° 3 del artículo 93 del Código Penal, el juez examinará si el hecho configura un delito que la ley de amnistía considera y si él fué cometido dentro del período que la misma ley establece. Una vez verificado que ambas circunstancias concurren, procederá a dictar auto de sobreseimiento definitivo sin más trámite".

Como fundamentos de la norma que se propone pueden señalarse los siguientes:

1) La interpretación que los jueces actualmente están dando a los arts. 107 y 113 del C. de Proc. Penal, no sólo origina problemas respecto a la aplicación de la ley de amnistía de 1978, sino que puede causar graves dificultades en la aplicación de futuras leyes de amnistía que puedan dictarse con fines de pacificación social;

2) La jurisprudencia más constante de la Corte Suprema relativa a la aplicación de las diversas leyes de amnistía que se han dictado en el país;

3) La opinión de tratadistas nacionales y extranjeros sobre la naturaleza de la amnistía; y

4) La circunstancia de que en 1990 el ejecutivo propuso, en la tramitación de las llamadas "Leyes Cumplido", introducir un inciso segundo al art. 107 en cuestión, de acuerdo con el cual, en casos de amnistía, el sobreseimiento definitivo sólo sería procedente de conformidad con el art. 413, esto es, después de agotada la investigación sobre el cuerpo del delito y la persona del delincuente (ver anexo).

No es aceptable que los tribunales apliquen un criterio de interpretación judicial que el legislador explícitamente desestimó como criterio de interpretación legal.

## II.-

Entre los casos de derechos humanos anteriores al 11 de Marzo de 1978 se encuentran los relativos a los llamados "detenidos desaparecidos". A su respecto la aplicación de la amnistía del DL 2.191 de 1978 presenta dificultades, porque se considera que tales casos revisten el carácter de delitos

**permanentes**, esto es, su ejecución se prolonga en el tiempo. Ello impide saber si tales delitos se cometieron antes o después del 11 de Marzo de 1978.

Debe buscarse solución al **tratamiento judicial** de esos casos.

Para ello se propone promover una norma legal que establezca:

**"Se presume de derecho que todo delito de naturaleza permanente cuya ejecución se hubiere iniciado antes del 10 de Marzo, se cometió antes de esa fecha".**

Los fundamentos de una norma de esta naturaleza debieran ser los siguientes:

a) Se trata de una norma que no tiene ningún otro alcance que el de dar fin al **tratamiento judicial** del dramático caso de los detenidos desaparecidos antes de Marzo de 1978. Dar término al **tratamiento judicial** de esos casos no puede significar cesar en los esfuerzos a que la sociedad y el Estado están obligados en orden a encontrar los restos de la víctimas para darles sepultura y a velar por sus deudos. De manera que la norma propuesta sólo será presentable si va unida a otras iniciativas encaminadas a facilitar, al margen de la vía judicial, todo aquello que pueda conducir a encontrar los cuerpos de las víctimas, a dignificar su memoria y a dar consuelo a sus deudos;

b) Manteniendo abierta la vía judicial para los casos de detenidos desaparecidos antes de 1978, no se consigue ningún beneficio. La vía judicial siempre resulta inadecuada para solucionar las consecuencias de conflictos de las dimensiones que el país vivió en la década del 70. Ello resulta todavía más evidente después que han transcurrido tantos años desde que los hechos tuvieron lugar; y

c) La exigencia moral de **buscar la verdad** en el caso de los detenidos desaparecidos debe entenderse cumplida por el "Informe Rettig". La justificación histórica del trabajo de la "Comisión Rettig" y su informe final, estriba precisamente en que es posible mostrar su eficacia, en contraste con el fracaso de la vía judicial, fracaso éste que no debe achacarse al Poder Judicial, sino a la circunstancia de que el proceso penal no está diseñado para solucionar casos como el de los detenidos desaparecidos, particularmente si ellos han ocurrido hace más de 15 años.

R.R.M.  
11.06.93.